

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. Mexico, Mayo 20 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por D. Juan N. Llaca, por sí y como apoderado de D<sup>a</sup> Guadalupe Velasco, contra los decretos 172 y 178, expedidos por la Legislatura del Estado en 30 de Diciembre de 1872, por violacion de garantías.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Juan N. Llaca ha interpuesto el recurso de amparo, creyendo violadas en su persona las garantías de que habla el artículo 16 de la Constitucion federal, por las personas que ocupan el lugar de las autoridades que debieran haber sido electas con arreglo á la Constitucion del Estado de Querétaro, quienes decretan y exigen contribuciones, careciendo de investidura legal para ello.

Aunque los poderes de Querétaro tengan una forma meramente artificial, en vez de la natural derivada de la real y efectiva delegacion del pueblo, no por esto hay violacion de garantía individual que provenga de parte de autoridad, en el acto de exigir contribuciones usurpando el lugar del poder legítimo.

Indudable como es, que la soberanía resi-

de en el pueblo, así como que la actual legislatura de Querétaro ha traicionado su confianza violando abiertamente la Constitucion, parecería lógico que el abuso del depósito trajera consigo su pérdida para el depositario, volviendo al poder del pueblo. Mas por justa que se considere en teoría esa conclusion, no puede admitirse en la práctica, ni concebirse algun método legal para su ejecucion. Esta devolucion del poder al pueblo en masa, acarrearía una completa disolucion en el cuerpo social. Si se va sustrayendo á la influencia del gobierno á individuo por individuo, se crearían personas privilegiadas exentas de llevar las cargas de la comunidad, destruyéndose el principio de su equitativa y proporcional distribucion.

Estos inconvenientes únicamente se obviarían procediendo directamente contra los que se hayan hecho culpables del delito de lesa-nacion, arrogándose el poder público de un Estado.

Residiendo, como se ha dicho, la soberanía en la comunidad política, esta necesita un gobierno que ejerciendo aquella, arregle los negocios comunes y los administre de la manera que sea mas propia para encaminarlo al fin social. Este poder soberano que reside en el pueblo, se halla limitado por las eternas leyes de justicia. “Persuadido el Congreso, dice el preámbulo de la Constitucion, de que la sociedad para ser justa, sin lo que no puede ser duradera, debe respetar los derechos concedidos al hombre por su Creador; convencido de que las mas brillantes y deslumbradoras teorías políticas son torpe engaño, amarga irrisión, cuando no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza de libertad civil, ha definido clara y precisamente las garantías individuales, poniéndolas á cubierto de todo ataque arbitrario. La acta de derechos que va al frente de la Constitucion, es un homenaje tributado en vuestro nombre por vuestros legisladores á los derechos imprescriptibles de la humanidad. Os quedan pues

libres, expeditas todas las facultades, que del Ser Supremo recibisteis para el desarrollo de vuestra inteligencia, para el logro de vuestro bienestar."

Siendo esto así, la delegacion de poder no debe comprender sino el necesario para reglamentar, en uso de aquellas facultades que hayan de ejercerse en nombre de todos los miembros del cuerpo político. Las demas deben ser absolutamente libres. Si los individuos que forman la comunidad política tienen ciertas facultades y cualidades que pueden ejercer por si mismos, aconsejados solamente por su sano juicio é intereses propio, hay injusticia en someterlas á la intervencion del legislador; por lo que deben ponerse fuera de la accion del gobierno y erigirse en derechos absolutos del ciudadano. Así lo ha comprendido nuestra Constitucion, poniendo bajo la salvaguardia de la autoridad federal esos derechos, conocidos bajo el nombre de garantías individuales.

El pueblo inglés fué el primero que comprendió la necesidad de hacer efectivas esas garantías, y compelió á sus legisladores á consignarlas en los diferentes actos que con el nombre de *bills* de derechos forman parte de la Constitucion Británica. "Los derechos absolutos de cada inglés, (que tomados en un sentido político y extenso, llamamos nuestras libertades), dice Sir Guillermo Blackstone, así como están fundados en la naturaleza y la razon, son de la misma manera coetáneos de nuestra forma de gobierno, aunque sujetos á veces á fluctuaciones y cambios como todo lo establecido por los hombres. A veces nos hemos visto deprimidos por principios imperiosos y tiránicos, y otras extendidos con tal lujo, que aun tendia su extension á la anarquía, estado peor que la tiranía, pues cualquier gobierno es mejor que ninguno absolutamente. Pero el vigor de nuestra Constitucion libre, ha salvado á la Nacion de estos embarazos; y tan pronto como han pasado las convulsiones consiguientes á la lucha, la balanza de nues-

tras libertades y derechos se ha puesto en el fiel, y sus artículos fundamentales han sido confirmados de tiempo en tiempo en Parlamentos, tan frecuentemente como se ha conocido el peligro." (Coment. Cap. 19 lib. 19)

La declaracion de estos derechos se encuentra en los primeros veintinueve artículos de nuestra Constitucion; contra su violacion cabe el recurso de los artículos 101 y 102, cuando viene de mano de autoridad, y su pleno goce constituye el de la libertad civil, que es la que así se encuentra garantizada á diferencia de la política, cuyo mantenimiento depende de diversos medios. Es por lo mismo un error confundir en una misma denominacion las facultades que el hombre puede poner en ejercicio individualmente y para su provecho particular, como son las que conocemos con el nombre de derechos individuales, con las obligaciones que tiene respecto de la comunidad para proporcionar á esta los medios de emplear el poder soberano, á fin de administrar sus intereses colectivos de la manera mas conveniente. Las primeras constituyen propiamente derechos reclamables por la vía de amparo. No así las segundas, que siempre tienen que llenarse. Y es de tenerse en cuenta que los poderes de Querétaro han violado y continúan violando derechos colectivos del pueblo queretano y no propios y peculiares de individuo alguno, cuando ejercen las funciones privativas de la autoridad que han usurpado.

Por lo demas, si hay violacion de garantía cuando un usurpador exige lo que no se le debe, esta violacion no viene ni puede venir de autoridad alguna, circunstancia requerida por el artículo 101 de la Constitucion para que aquella sea reparable por el poder judicial de la federacion. La idea de autoridad excluye necesariamente la de usurpacion.

Por estas consideraciones, el promotor fiscal pide se declare no haber lugar al amparo solicitado; sacándose testimonio de este

expediente y acumulándose á los demas de su especie para proceder en la forma prevenida por el artículo 4º de la ley de 6 de Diciembre de 1856, contra los que se hallen en el caso de la fraccion 10ª del artículo 3º

Querétaro, Febrero 13 de 1873.—*Luis Gastañeda.*

*Otro pedimento del Promotor fiscal.*

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Juan N. Ilaea ha interpuesto el recurso de amparo contra los decretos números 172 y 178 expedidos con fecha 30 de Diciembre último por la Legislatura del Estado, en los que se imponen varias contribuciones. Las pruebas rendidas se reducen: 1º, á que el actual Congreso se instaló con 7 diputados entre los que figuran D. Jesus Córdova y D. Ramon Quesadas por el Distrito de Amcalco; 2º á que en el congreso anterior figuraron de diputados, tambien por Amcalco, D. Juan N. Rubio y D. Eleuterio Frias y Soto; 3º á que el nombramiento de dos diputados para el presente congreso, no podia haberse hecho por el mismo distrito (artículos 35 y 36 de la Constitucion del Estado.)

Por lo expuesto se ve, que para declarar que la Legislatura se instaló solamente con 5 miembros, se necesitaria antes calificar de nula la eleccion de los CC. Córdova y Quesada, diputados por el distrito de Amcalco; atribuyéndose el juzgado una prerogativa propia y peculiar del Congreso, y de la que este ha hecho uso. Los Estados son libres y soberanos en lo tocante á su régimen interior ejerciendo todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitucion á los funcionarios federales. No estando pues concedida á estos la calificacion de las dudas que se ofrezcan sobre la eleccion de los miembros de una Legislatura, es evidente que de esa facul-

tad ha estado y está en posesion legal la de Querétaro, por entenderse estarle reservada al Estado, cuya Constitucion la ha puesto en sus manos (artículos 40 y 117 de la Constitucion federal y 40 de la del Estado.)

El supremo poder de la Federacion se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. "Nunca podrán reunirse dos ó mas de estos poderes en una persona ó corporacion, ni depositarse el legislativo en un individuo" (artículo 50 de la Constitucion.) El ejercicio del supremo poder legislativo está depositado en una asamblea, que se denomina Congreso de la Union (artículo 51.) Este califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre ellas (art. 60.) Así es que esta facultad es propia y exclusiva del poder legislativo. Siendo constitucional la separacion de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno debe girar dentro de su respectivo círculo, sin turbar la accion de los demás.

Lo que los ingleses y americanos denominan en la Constitucion el *bills* de derechos ó libertades de los ciudadanos, tiene por objeto poner fuera del alcance de los que ejercen el poder ciertas facultades de los individuos, limitando así la autoridad. En vano se harían semejantes declaraciones de derechos y libertades en una constitucion si al mismo tiempo no se reglamentase en ella el ejercicio del poder delegado al gobierno, de manera que, en la combinacion misma del mecanismo gubernamental, se encuentren garantías de la inviolabilidad de esos derechos, al mismo tiempo que las facultades necesarias para administrar los intereses colectivos de la comunidad. La division de las funciones del poder en distintos ramos, es una de las medidas que conducen á la realizacion de tan importantes fines.

Hacer esta division de las funciones del poder en distintos departamentos, arreglar las relaciones entre los funcionarios que hayan de desempeñar las obligaciones de cada

uno de ellos, asegurar á estos la necesaria independencia de accion dentro de la esfera de sus respectivas facultades, al mismo tiempo que los medios de hacerlos responsables por los abusos de autoridad que cometan, es lo que propiamente puede llamarse constituir el gobierno." Las declaraciones de derechos puestas al frente de las constituciones no implican mas que una limitacion del ejercicio del poder; mientras que la separacion de los poderes es indispensable para hacer efectiva esa limitacion.

Por lo expuesto el Promotor fiscal pide: se niegue el amparo solicitado. Querétaro, 1.º de Marzo de 1873.—*Luis Castañeda.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Querétaro, Marzo 22 de 1873.—Visto el presente juicio promovido por el C. Juan N. Llaça por sí y en representacion de D.<sup>a</sup> Guadalupe Velasco, cuyos bienes administra, y seguido despues por el C. Próspero C. Vega con poder bastante; los fundamentos del escrito de queja; el auto de suspension que está á fojas 10 de este expediente; el informe con justificacion rendido por la autoridad ejecutora; lo que pidió el Promotor al evacuar el traslado que de su informe se le corrió, y cuyo pedimento aparece á fojas 21; las pruebas rendidas; los alegatos del actor y fiscal; la comunicacion que al juzgado dirigieron los diputados secretarios de la Legislatura de este Estado, que se vé á fojas 54, en la que consta que esa Legislatura se negó á remitir los documentos que se le pidieron; la citacion para sentencia y todo lo demas que debia verse.

Considerando: que el actor apoya su queja en la ilegitimidad de la Legislatura de este Estado, fundando en esta su absoluta incompetencia para legislar y para hacer declaraciones válidas de quien deba ejercer el poder Ejecutivo, y aplicando esto á la garantía que se contiene en el artículo 16 de

la Constitucion General de la República la señala como violada en su persona 6 intereses con los decretos 172 y 178 que imponen varias contribuciones que se le están exigiendo por autoridades incompetentes.

Considerando: que para decidir esa controversia, es absolutamente necesario entrar en la investigacion de si existe ó no esa ilegalidad de que nace la incompetencia, porque de otra suerte resultaría enteramente ilusoria la garantía del artículo citado, cuando su espíritu y el de el artículo 101 de la misma Constitucion, es el de proteger al débil, de las agresiones del fuerte que ejerce autoridad en cualquiera manera.

Considerando: que la competencia de quienes ejercen esa autoridad, no procede del hecho de constituirse en ella, sino de las leyes que la transmiten á quienes las mismas colocan en aquel rango, y nunca á los que la usurpan.

Considerando: que en el presente caso, la incompetencia alegada no viene de traslimitacion de la que concede la ley á la autoridad legítima; sino, de no haberse transferido de ninguna clase á la Legislatura y Ejecutivo, que solo de hecho aparecen autoridades, de donde se sigue ser enteramente incompetentes para todo, una vez probada su ilegalidad.

Considerando: que tal ilegalidad aparece probada en este juicio por la parte actora, con el testimonio de siete testigos; de sus dichos informes aparece, que la Legislatura se instaló con menos de la mitad del número total de diputados de que se compone, con manifiesta infraccion del artículo 41 de la Constitucion particular del Estado que dice: "El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros." Cuya prueba dió la misma parte actora en su escrito de alegato de fojas 88; mientras la Legislatura se negó á ministrar los datos pedidos por el promotor; y mientras que la autoridad ejecutiva al informar, ningun documento justificativo re-

mitió, por lo que contra la prueba del actor, ninguna obra en este expediente.

Considerando: que ni lo expuesto por la autoridad ejecutora que informó, ni por el promotor en su alegato, sobre ataques á la soberanía del Estado, puede aplicarse á la presente cuestión; porque aunque es verdad que el artículo 117 de la constitucion general, reserva á los Estados todas las facultades que no están expresamente concedidas á los funcionarios federales, ese cúmulo de facultades no puede estenderse hasta el grado de infringir con ellas ambas constituciones, general y particular, que es en lo que se funda la parte quejosa para solicitar el amparo, pues que por el contrario esa soberanía queda restringida por el espíritu y letra del artículo 101 de la misma constitucion general de la República.

Considerando por último: que de no tomarse en cuenta todas las razones anteriores, parecería sin objeto el artículo 1º de la constitucion general tantas veces citado y destruido por la base el objeto de las instituciones, que no es otro que el de asegurar los derechos del hombre. Por tales razones, y con fundamento de los artículos 6º, 16 y 101 de la constitucion federal y en uso de las facultades del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, Fallo: que se debe declarar y se declara, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Juan N. Llaca, y á su representada Dª Guadalupe Velasco, contra los decretos 132 y 128 de 30 de Diciembre de 1872, expedidos por la legislatura del Estado de Querétaro. Notifíquese á las partes; prevéngase á la actora reponga el papel comun de que se ha usado por no demorar la secuela de este expediente, con el sellado que corresponde; sáquense las copias de esta sentencia para el «Semanario Judicial y Diario del Gobierno de la República» y elévese este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para los efectos consiguientes. Así definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firmó el C. Juez de Distrito primer

TOMO IV.—PARTE II.

Suplente, Lic. Mariano Pimentel. Doy fe.  
—Mariano Pimentel—Francisco Ruiz, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 6 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 25 de Enero último promovió en la ciudad de Querétaro, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, el C. Juan N. Llaca, por sí y como apoderado de Dª Guadalupe Velasco, contra los decretos 172 y 178, expedidos con fecha 30 de Diciembre de 1872, por la Legislatura del referido Estado, en los que se imponen varias contribuciones, alegando el promovente que con esos decretos se viola en su persona y en la de su representada, la garantía otorgada por el artículo 16 de la Constitucion federal, pues que esos decretos no han sido expedidos ni sancionados por autoridades legítimas, porque la legislatura que los expidió no se instaló con el número competente de Diputados, segun el artículo 41 de la Constitucion del Estado de Querétaro; y el Gobernador que hizo la sancion, fué declarado con tal carácter por aquella legislatura ilegítima, publicandola declaración otro Gobernador con las mismas nulidades, así como la declaración de éste fué publicada por un Gobernador usurpador del poder público, elevado al Gobierno contra el tenor del artículo 77 de la Constitucion de Querétaro.

Vistas las constancias de autos y considerando: 1º; Que la Legislatura se instaló con mas de la mitad del número de Diputados que la forman, segun la constitucion del Estado; y que si en la eleccion de algunos de estos funcionarios hubo vicios, constando que realmente fueron electos, solo á la Legislatura toca, en su carácter de Colegio electoral, calificar y apreciar estos vicios. 2º. Que si al hacerse la declaración

de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado, esta infracción por sí sola no puede motivar el recurso de amparo de garantías, sino ser objeto de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral.

Por las consideraciones expuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente. Primero: se revoca la sentencia que el Juez de Distrito del Estado de Querétaro pronunció con fecha 22 de Marzo próximo pasado, en la que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Juan N. Llaca y á su representada D<sup>a</sup> Guadalupe Velasco, contra los decretos números 172 y 178, de 30 de Diciembre de 1872, expedidos por la Legislatura de dicho Estado. Segundo: la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Llaca ni á la S<sup>a</sup> Velasco contra los mismos decretos, en virtud de no haber garantía individual violada.—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de Distrito que las elevó en revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pédro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado de Distrito de Hidalgo por varios mineros, beneficiadores y fundidores de metales de plata del mineral de Pachuca, contra una orden del Administrador de rentas del mismo, por la cual se impone á los expresados, la obligación de hacer manifestaciones de las fundiciones que hicieren cada 15 días, con expresión de los nombres de los dueños de las platas.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

El Promotor fiscal dice: que en el recurso interpuesto ante este Juzgado por los beneficiadores y fundidores de plata de este mineral, se pide amparo y protección contra la Administración de rentas de esta Ciudad, y por conclusion que se ordene la suspensión del acto reclamado.

Salvando el que suscribe, el mejor acuerdo de V. opina porque se decrete dicha suspensión, pues, juzga ser de difícil reparación los perjuicios que se originarían á los solicitantes, si al concederse el amparo, ya las arcas del Estado hubieran percibido la multa impuesta.

En esta virtud y con fundamento del artículo 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide el Promotor como acaba de exponer:

Pachuca, Enero 23 de 1873. (firmado) —*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Mayo 29 de 1873.—*F. Briseño*, secretario.

### Otro pedimento del C. promotor fiscal.

El promotor fiscal dice: que el 15 de Febrero próximo pasado, los beneficiadores y fundidores de metal de plata en este mineral, CC. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elscser, Ma-